

PRIMERA PLANA

Año I. Núm. 28. 50 Ptas.
8-14 de septiembre de 1977

Martín Villa nos pega

1000 enchufados
más:

El chollo del Movimiento

Extremadura: pacto social del hambre

Uno de cada cuatro extremeños sin un tomate que llevarse a la boca

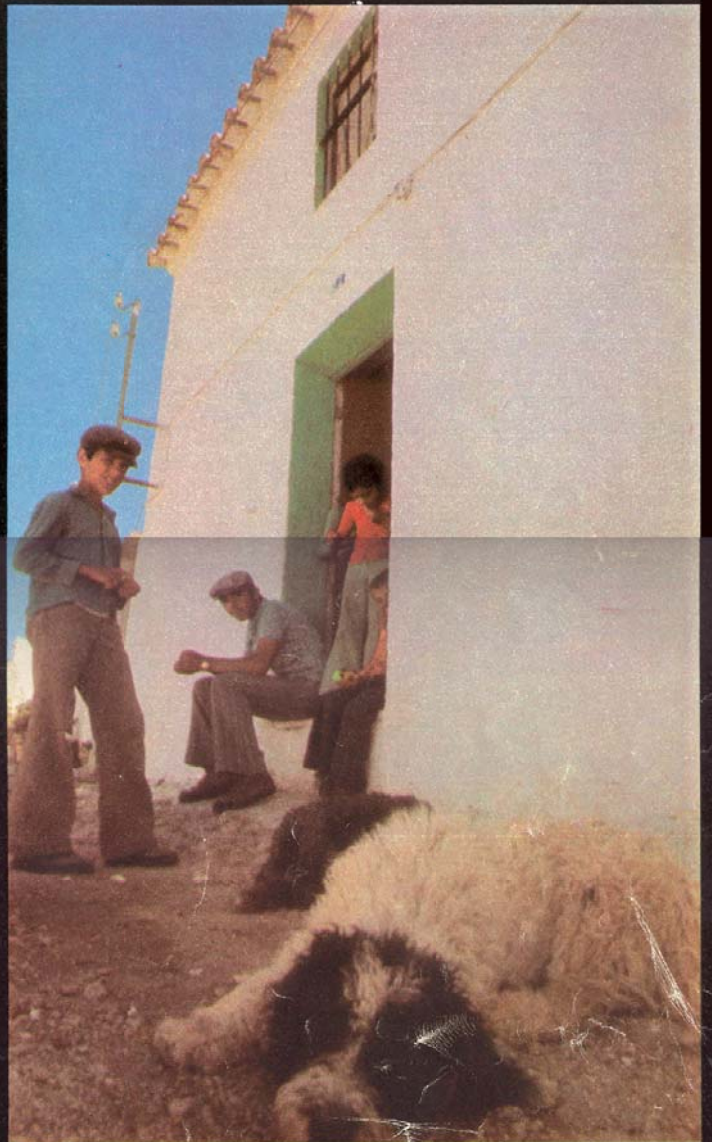
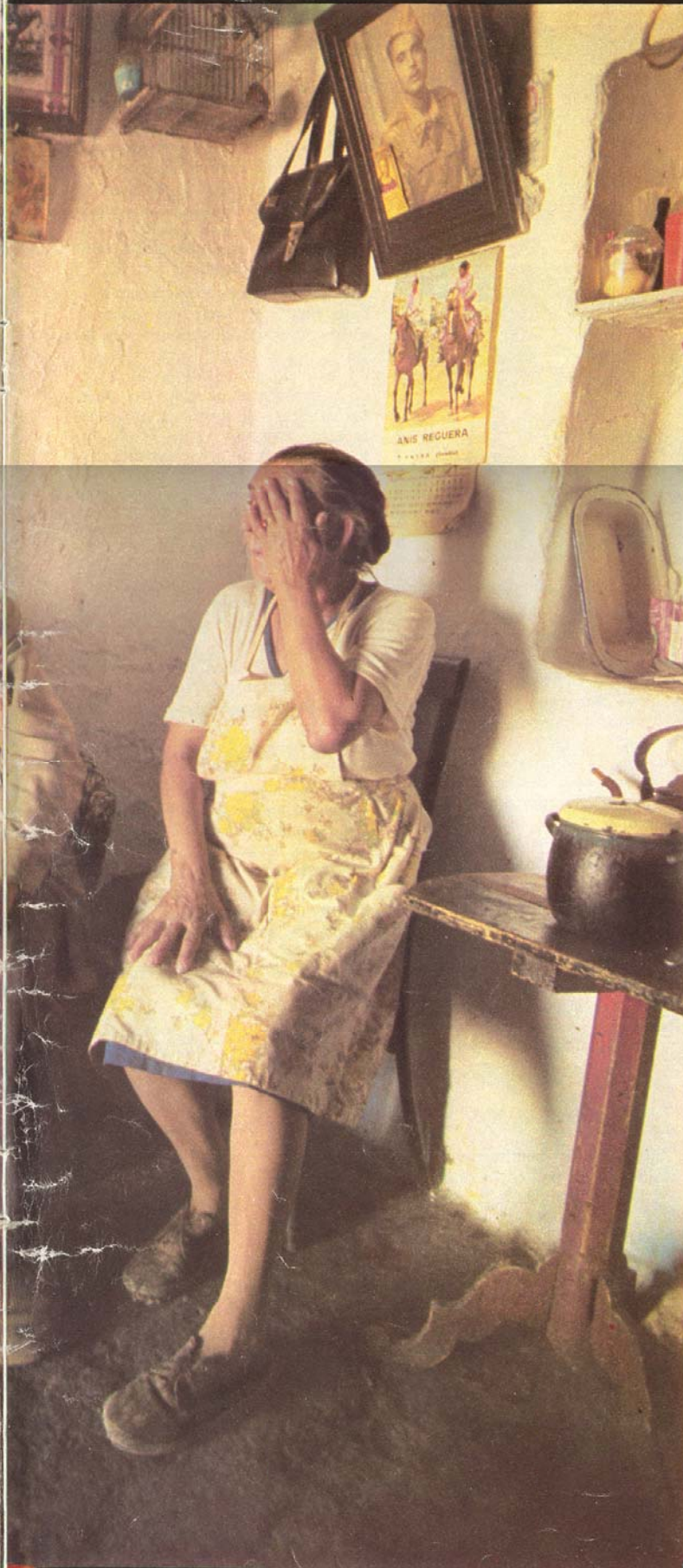
El pacto social del hambre

Con una cuarta parte de la población activa sin trabajo, Extremadura constituye hoy el punto más negro en la geografía de la crisis española. Mientras en Madrid se negocia un pacto económico abierta o tácitamente, los braceros extremeños sólo pueden discutir el pan con tomate que puedan conseguir cada día, mientras su región exporta energía, productos agrícolas y emigrantes que ya comienzan a regresar y a luchar en su propia tierra. Pese al olvido, Extremadura existe. Y allá, donde todo se paga a menor precio, los peones pueden ganar 800 pesetas de jornal durante unos meses. Después: la espera y el hambre.

Texto y fotos: JOSE LUIS FANDOS ARTEMIO BAIGORRI

EXTREMADURA
EXISTE





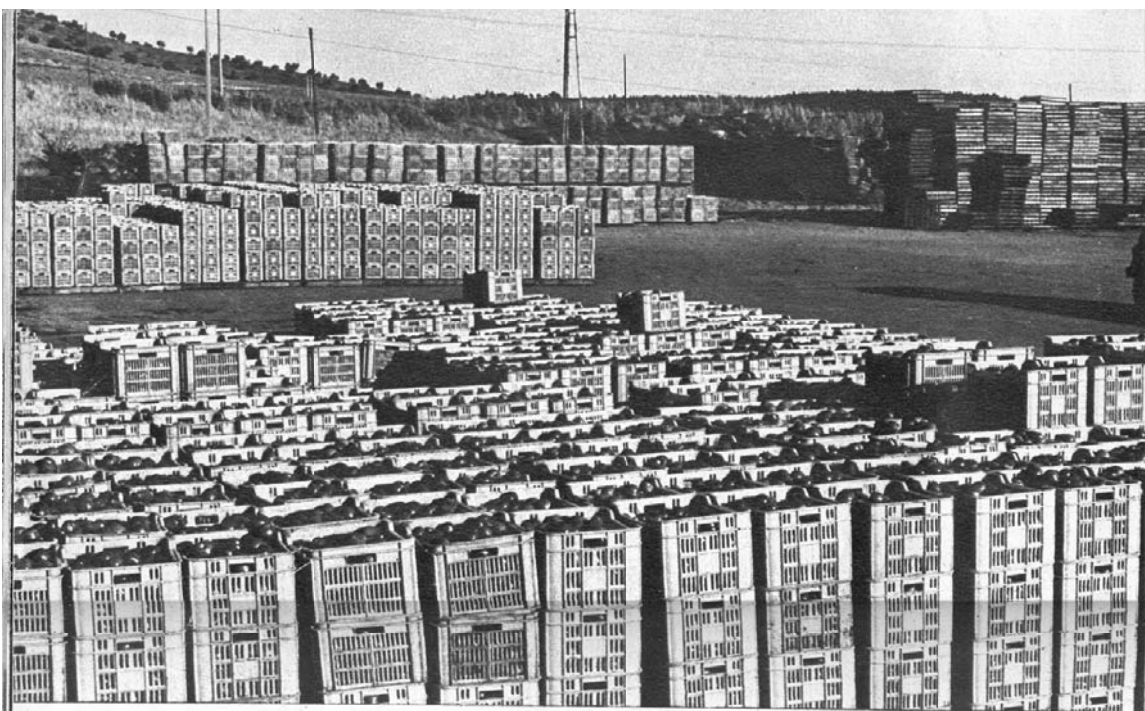
El día de un bracero: amanecer con el sol, recorrer los campos y esperar, la familia en casa, la difícil oportunidad del trabajo eventual.

En Extremadura, donde se produce la mayor parte de la producción nacional del tomate concentrado que, después, se empleará en la fabricación del jugo de tomate y del ketchup, la mayoría de sus habitantes no han saboreado estos productos en toda su vida. Extremadura, famosa tradicionalmente por sus cerdos y las ovejas merinas, sólo sacrifica en los mataderos regionales el 10 por ciento de la producción ganadera, mientras en algunas zonas de la región se pasa hambre física, de la de no tener un mendrugo de pan que llevarse a la boca. A pesar de la inmensa riqueza agrícola y ganadera, a pesar de la gran producción hidroeléctrica y de las grandes extensiones de tierra cultivable, en Extre-

madura, el territorio más olvidado del Estado español, parte de la población tiene hambre. Y lo más grave, se pacta el hambre. Se intenta que, a finales del siglo XX y en la décima potencia industrial del mundo haya gente que viva de la caridad de las empresas o del Estado.

A finales del primer semestre del presente año, Extremadura era considerada por el Gobierno una de las tres zonas «calientes» de todo el Estado en cuanto al paro. Badajoz era una de las siete provincias españolas en que los parados superaban el 10 por ciento de la población activa. En esta provincia, la cifra real de parados, en el mes de marzo, era de 50.000 sobre un total de 200.000 activos, afectando sobre to-





El tomate extremeño se paga a la mitad de lo habitual en el resto del Estado. Las multinacionales, sin embargo, son las mismas que en Murcia o Alicante.

do a los sectores agrario y de la construcción.

La situación es más penosa en el sector agrario, ya que, a diferencia de los otros sectores de la producción, los jornaleros del campo en paro no tienen ningún derecho a cobrar seguro de desempleo. Por paradójico que resulte, los braceros agrícolas, para cobrar el paro, no pueden estar parados.

Vivir de la caridad estatal

Cuando el paro llega a unos límites tan insospechados que incluso las altas esferas del Gobierno comienzan a ponerse nerviosas, se destinan, a golpe de decreto, unos cuantos millones para paliarlo, para dar trabajo a los parados del campo en lugar de crear un Seguro de Desempleo, reivindicación por la que luchan actualmente todos los sindicatos campesinos de Extremadura.

Los millones del Estado, que, a través del Banco Central, van a manos del alcalde de cada localidad, se destinan a fomentar «labores comunitarias» sin ninguna utilidad productiva y que tienen como único fin evitar la presión social de las clases más desfavorecidas y, en el más caritativo de los casos, evitar la muerte por inanición de varios cientos de personas en algunas semanas.

Como botón de muestra, en Villafranca de los Barros se destinaron, recientemente, 4,5 millones de pesetas para un censo que supera-

ba los 200 jornaleros agrícolas en paro. A un jornal base de 650 pesetas diarias, la cantidad donada por el Gobierno apenas si llegaba para 24 días de trabajo, cuando la mayoría de los parados llevaban un mes y medio, y en algunos casos hasta tres meses, sin trabajar y sin recibir ningún tipo de paga o desempleo. Al día siguiente de recibirse los dineros en la Alcaldía, 20 obreros partieron a limpiar un canal de desagüe de la población, 11 a limpiar unos caminos agrícolas, 6 a recoger las basuras y desperdicios

La ayuda estatal no alcanza para más de veinte días de trabajo

sultos en los alrededores del pueblo, y el resto, con picos y palas únicamente, a abrir una zanja de 1 metro de ancho por 1,50 metros de profundidad que no sabían dónde conducía. Contaba un obrero de Torremejías: «el caso es hacernos trabajar, porque no debemos tener derecho a cobrar subsidio de paro como los obreros industriales».

Estos regalos del Gobierno para una población de «asistidos», a la que sólo les falta el «carnet de po-

bre», son más escandalosos cuando se utilizan con fines propagandísticos. Tan solo un mes antes de las últimas elecciones generales llegaba a Badajoz un cheque de 200 millones de pesetas enviado por el Gobierno «con destino a paliar el grave problema del paro». Con este dinero, ICONA e IRYDA emplearon 4.000 obreros hasta poco después de las elecciones en no hacer casi nada: arrancar hierbas y cortar ramas de eucaliptus. Doscientos millones que, a cargo del bolsillo de todos los españoles, se ahorró la UCD en promocionar el actual ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León, diputado por Badajoz.

Los mercados del hambre

Mientras las estadísticas oficiales se ufanan de que en la década de los 70, y a pesar de la crisis económica, se han alcanzado los 2.000 dólares de renta per cápita, los jornaleros agrícolas de Badajoz han conseguido los 2.000 dólares anuales de renta... por familia, que, en la mayor parte de los casos, son muy numerosas.

Un jornalero agrícola trabaja, por término medio, unos 200 días

No sólo el tomate pertenece a las grandes compañías; también la tierra y los escasos puestos de trabajo.

al año con un sueldo de 650 pesetas diarias, permaneciendo parado entre 4 y 5 meses al año sin percibir, durante este tiempo, ningún tipo de ayuda económica. Ello le supone unos ingresos brutos anuales de 140.000 pesetas aproximadamente. Con este dinero deben sobrevivir durante un año 5 personas, y en algunos casos hasta ocho y nueve. Familias con tres y cuatro hijos y abuelos ancianos que deben comer de un raquítico jornal.

Los jornaleros que no hayan podido vender su fuerza de trabajo, al día siguiente amanecerán con el sol y, con el bocadillo envuelto en un pañuelo, acudirán a las siete de la mañana al mercado de abastos en espera de tareas no previstas la tarde anterior en las fincas de los grandes o de algún cambio caritativo en el ánimo de quienes todo lo tienen. Si esto no sucede, volverán a sus casas y, después, marcharán por los campos a recoger unos puñados de hierba con los que alimentar algún animal doméstico. Por la tarde, acudirán al bar, pedirán su «medio» de vino al precio de 10 pesetas y aguantarán con él hasta la noche, para volver a empezar. Y así los 365 días del año.

Pan con tomate: historia de un pacto

En las Vegas del Guadiana, la zona afectada por el Plan Badajoz, comienza a finales de julio la campaña de recogida del tomate, producto clave en la economía de la zona, no sólo por su importancia dentro del producto provincial bruto, sino por la cantidad de mano de obra que se emplea durante unos meses para su cosecha. Por



**Sólo
falta
poseer
un "carnet
de pobre"**

esta causa, el paro agrícola en la zona desaparece casi en su totalidad durante un par de meses.

A finales de julio, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), federado a la CSUT extremeña, lanzaba un manifiesto a los jornaleros extremeños de las zonas tomateras con una plataforma reivindicativa que contenía los siguientes puntos: 1.200 pesetas de jornal por siete horas de trabajo; transporte al trabajo a cargo de la empresa; Seguridad Social a cargo del Gobierno; NO a los destajos; Seguro de Desempleo durante todo el año. El impacto del manifiesto fue inmediato. Para esta lucha, los jornaleros contaban con un arma fundamental como es la efimeridad del tomate, el cual una vez maduro, si no se recoge de las matas, se pudre rápidamente, y las características de la industria tomatera, que sólo puede subsistir si existe producto para enlatar.

La primera localidad en lanzarse a la huelga, en la lucha por las 1.200 pesetas, fue Olivenza, pueblo de 10.000 habitantes que contaba por entonces con 300 jornaleros agrícolas parados. Al conflicto se unen rápidamente los jornaleros de todos los pueblos de las Vegas Bajas del Guadiana, una veintena de

localidades situadas en un radio de 40 km alrededor de Badajoz. En un principio, se pretende negociar con los empresarios agrícolas, pero éstos no aparecen en la mesa de negociaciones y la empresa LUKUS, S. A., queda como único interlocutor.

En realidad, LUKUS, S. A., empresa multinacional de la alimentación, es el mayor empresario agrícola cultivador de tomates. Además de disponer de dos fábricas conserveras, cultiva directamente varios miles de hectáreas de tomate de las más de 10.000 que administra, arrendadas o en propiedad, en toda la provincia de Badajoz.

Como alternativa al jornal de 1.200 pesetas, los jornaleros planteaban un destajo de 23 pesetas por caja de tomate recogida (20 kg aproximadamente). Una comisión de la comarca de Olivenza, formada por CC. OO. y UGT, negocian directamente con LUKUS acordando por ambas partes un jornal diario de 1.000 pesetas con la condi-

tas del Guadiana, cuya localidad principal es Don Benito, lanzaron una plataforma muy semejante a la que propusiera el SOC unas semanas antes. Los puntos fundamentales eran: 1.200 pesetas de jornal; no al destajo; seguro de desempleo; los empresarios deberían contratar a los jornaleros a través de las oficinas de colocación o de los sindicatos, en lugar de ir a buscarlos a la plaza del pueblo.

En Don Benito había, entonces, más de 300 jornaleros agrícolas en paro con el agravante de no tener derecho a las subvenciones del paro para «trabajos comunitarios» porque, según el Gobierno, en los pueblos de regadío, como sucede en Don Benito, hay trabajo para todos y el dinero del paro sólo se destina a los pueblos de secano. Por otra parte, los jornaleros que habían sido contratados para las primeras labores de la cosecha del tomate estaban percibiendo salarios inferiores a las 800 pesetas.

La generalización del conflicto a toda la zona fue cosa de días.

La cosecha del tomate: solo dos meses de trabajo al año

ción de recoger un mínimo de 60 cajas diarias, cantidad prácticamente imposible de recolectar por ningún jornalero de Badajoz, Navarra, Murcia o cualquier otra zona tomatera española.

En esos días se habló de pacto entre las centrales sindicales —CC. OO. y UGT— y la empresa LUKUS. En cualquier caso, mientras se negociaba, LUKUS, que se había comprometido a contratar únicamente jornaleros de la comarca con el fin de atajar temporalmente el paro de la zona, rompía su promesa. Un día antes de que el acuerdo entrara en vigor, 150 jornaleros procedentes de Cáceres llegaban a la finca de LUKUS en Olivenza en autobuses y camiones de la empresa, con colchones, esposas e hijos. Ninguno de ellos se aloja en Olivenza, y la empresa no dispone de barracones o dormitorios para alojarlos. Es de suponer que duermen en el campo, en naves o en «chozos» de los pastores.

Don Benito: la huelga rota

A principios de agosto, las Comisiones Obreras de las Vegas Al-

Las tres centrales sindicales que actúan en la comarca —CC. OO., UGT y SU— han dado continuamente distintas versiones del conflicto. Para CC. OO. y UGT, la huelga sólo pretendía conseguir un jornal justo para los recogedores de tomate y resolver el problema del paro, «porque los trabajadores no están preparados para lanzarse a otras aventuras». Ambas centrales consideran que sus objetivos se han cumplido. Sin embargo, el Sindicato Unitario habla de una batalla perdida por los trabajadores. Su pretensión era conseguir un salario mínimo justo para todos los jornaleros del campo por igual, además de todas las otras medidas tendentes a mitigar, ya que no resolver el problema del paro. Fue la propia dinámica de la huelga la que hizo surgir o despreciarse unas u otras alternativas, aunque al final los acuerdos terminasen con todo.

A los dos días de empezar la huelga, los regadores se unieron a las reivindicaciones de los jornaleros del tomate. Entonces, se acordó reivindicar un jornal de 1.000 pesetas para todos los jornaleros del campo, ya que si sólo se apoyaban las 1.200 pesetas de los to-

materos, éstos podían quedarse sin el apoyo y la solidaridad de los otros jornaleros.

Mientras las centrales sindicales más fuertes persisten en ceñirse al tomate, las asambleas de trabajadores se ratifican en las 1.000 pesetas de salarios para todos. El 15 de agosto, alrededor de 1.500 jornaleros agrícolas de Don Benito, Valdetorres, Guareña, Villagonzalo, Santa Amalia y Magacela se encontraban en huelga.

Para romper la huelga, los grandes propietarios agrícolas fletan autobuses con destino a pueblos alejados de la comarca en busca de jornaleros a los que les pagan las 1.000 pesetas diarias que niegan en las Vegas Altas del Guadiana. En ese momento aparecen los piquetes de huelga y la Guardia Civil vigila los cruces de los caminos agrícolas y los latifundios más importantes. El día 14 de agosto, tres jornaleros son detenidos en Guareña por la Guardia Civil acusados de formar piquetes.

El conflicto pasa, inmediatamente, a dominio de la opinión pública extremeña. El director de la fábrica CONSIBER, cuyo capital pertenece en un 60 por ciento al grupo multinacional Bünger, reta públicamente a las centrales sindicales CC. OO. y UGT a un debate en el que se demuestre que la fábrica puede pagar un salario de 1.000 pesetas por la cosecha de sus tomates. Aun a sabiendas de que con las subvenciones del FORPPA y con la reciente devaluación de la peseta, el kilo de tomate resultará casi gratis para las empresas conserveras, ninguna central acepta el debate.

Por no se sabe qué extraños mecanismos, los acuerdos finales con los empresarios agrícolas reducen la reivindicación inicial a 800 pesetas de jornal, y sólo para los recogedores de tomate, y con la obligación, por parte de los jornaleros, de recoger un mínimo de 59 cajas diarias de tomate redondo o 53 del llamado «de pera», de menor tamaño que el anterior.

Cuando finalice la campaña del tomate el paro volverá a ser alarmante en todas las Vegas del Guadiana y en la provincia de Badajoz. Los jornaleros volverán a esperar los millones de limosna que da el Estado para los «trabajadores comunitarios», porque, de lo contrario, el invierno será duro y muy largo. Un invierno en el que miles de jornaleros volverán a presionar, con su presencia, sobre un estado de cosas que les ha conducido a ser una población de asistidos que viven de la caridad del Estado y de la «comprensión» de las conserveras multinacionales. ■

